



# Asamblea General

Distr. general  
28 de enero de 2021  
Español  
Original: inglés

## Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

### Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 89º período de sesiones, 23 a 27 de noviembre de 2020

#### Opinión núm. 70/2020, relativa al Sr. Laltu (alias Somrat Morol) (Australia)\*

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 29 de junio de 2020 al Gobierno de Australia una comunicación relativa al Sr. Laltu (alias Somrat Morol). El Gobierno respondió a la comunicación el 28 de septiembre de 2020. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional,

\* De conformidad con el párrafo 5 de los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo, Leigh Toomey no participó en el examen del presente caso.



étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

### **Información recibida**

#### *Comunicación de la fuente*

4. El Sr. Laltu (alias Somrat Morol) es un ciudadano de Bangladesh, nacido aproximadamente el 20 de julio de 1988. Habla bengalí y nació y creció como musulmán suní. En 2017, se convirtió al cristianismo. El Sr. Laltu fue criado por padres adoptivos y no tiene contacto con sus padres biológicos. No tiene documentos de identidad y nunca ha tenido pasaporte ni certificado de nacimiento.

5. Aproximadamente en 2008, el Sr. Laltu comenzó una relación con una mujer cristiana, cuya familia lo amenazó. Tras intentar contraer matrimonio, la pareja fue capturada y llevada de vuelta a su pueblo, donde el Sr. Laltu recibió una paliza de los lugareños y fue detenido por la policía sin cargos durante más de un mes. El Sr. Laltu fue repudiado por su padre adoptivo y expulsado del pueblo.

6. El Sr. Laltu también teme por su seguridad debido a que fue testigo de un asesinato en la tienda de su padre en 2007 o 2008. El asesinato tuvo lugar a raíz de un incidente entre dos miembros de un partido político local. Los miembros del partido político al que pertenecía la víctima presionaron al Sr. Laltu para que se presentara como testigo. Sin embargo, los miembros del partido opuesto amenazaron con matarlo si prestaba declaración. En octubre de 2010, el Sr. Laltu huyó en barco a Malasia, donde trabajó ilegalmente como soldador. En octubre de 2012, huyó a Australia, vía Indonesia, también en barco.

7. El 7 de noviembre de 2012, el Sr. Laltu llegó a aguas territoriales australianas en una embarcación procedente de Indonesia que fue interceptada por la Marina australiana. La fuente supone que se ha mostrado algún documento que justifique la detención, pero actualmente no se dispone de ningún documento de esa naturaleza. Además, se señala que los oficiales eran reconocibles por sus uniformes y los distintivos de su barco.

8. La detención tenía su fundamento en una decisión del Ministerio de Inmigración y Ciudadanía. El motivo de la detención fue, según las autoridades, la entrada no autorizada en Australia por vía marítima. En concreto, en sus artículos 189 1) y 196 1) y 3), la Ley de Migración de Australia de 1958 dispone específicamente que los no ciudadanos en situación ilegal deben ser detenidos y permanecer en detención hasta que: a) sean expulsados o deportados de Australia; o b) se les conceda un visado. El artículo 196 3) establece específicamente que un no ciudadano en situación ilegal no puede ser liberado de su detención, ni siquiera por un tribunal, a menos que se le haya concedido un visado.

9. El Sr. Laltu fue trasladado inicialmente al Centro de Detención Alternativo de Wickham Point (Darwin). El 14 de noviembre de 2012 fue trasladado al Centro de Detención de Inmigrantes de la Isla Christmas.

10. La fuente explica que el Sr. Laltu sigue detenido porque, según la Ley de Migración, se le considera un no ciudadano en situación ilegal que ha entrado en el país por vía marítima de forma no autorizada. Concretamente, el artículo 189 de la Ley establece que, si un agente sabe o sospecha razonablemente que una persona que se encuentra en una zona de migración (distinta de una zona extracontinental excluida de las zonas de migración) es un no ciudadano en situación ilegal, debe proceder a su detención.

11. El 28 de agosto de 2015, se invitó al Sr. Laltu a que solicitara un visado de protección temporal o un visado de refugio. Las personas que se considere que han entrado en el país por vía marítima de forma no autorizada tienen prohibido presentar una solicitud válida de protección a menos que sean invitadas a hacerlo por el Ministro de Interior o el Ministro de Inmigración y Protección de Fronteras. Para el Sr. Laltu, esa prohibición se levantó pasados dos años y medio desde que llegara en busca de asilo y fuera detenido. Los ministros competentes pueden ejercer sus poderes indelegables y no revisables para liberar al Sr. Laltu de su detención en cualquier momento.

12. El 15 de enero de 2016, el Sr. Laltu presentó una solicitud de visado de refugio. El 12 de julio de 2016, el Ministerio de Interior la denegó, lo que hizo que el caso se remitiera automáticamente al Organismo de Evaluación en materia de Inmigración. El 16 de septiembre de 2016, el Organismo de Evaluación en materia de Inmigración confirmó la decisión de no conceder el visado. El 1 de marzo de 2017, el Tribunal de Circuito Federal confirmó esa decisión.

13. El 6 de agosto de 2018, el Pleno del Tribunal Federal emitió una decisión en virtud de la cual se permitía al Sr. Laltu apelar y se sostenía que el Organismo de Evaluación en materia de Inmigración no era competente para conocer el caso del Sr. Laltu, que debería haber sido remitido al Tribunal Administrativo de Apelación. Sin embargo, el 5 de abril de 2019, al Sr. Laltu se le volvió a notificar una decisión del Ministerio de Interior, contra la que presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo de Apelación el 8 de abril de 2019. El 11 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo de Apelación confirmó la decisión del Ministerio de Interior de denegar al Sr. Laltu un visado de refugio.

14. Según la información recibida, a lo largo de este complejo y largo proceso de apelación, el Sr. Laltu ha permanecido en varios centros de detención de inmigrantes tanto en Australia continental como en ubicaciones extracontinentales, entre ellos el Centro de Detención de Inmigrantes de la Isla Christmas, el Centro de Detención Alternativo de Wickham Point (Darwin), el Centro de Detención de Inmigrantes de Yongah Hill (Australia Occidental) y el Albergue de Tránsito de Inmigrantes de Melbourne.

15. En el transcurso de su detención, el Sr. Laltu ha mostrado un buen carácter y ha permanecido constantemente recluido en recintos e instalaciones de baja seguridad. Su historial muestra que es una persona que mantiene relaciones respetuosas con otros detenidos, el personal y las autoridades.

16. La salud mental del Sr. Laltu se ha deteriorado progresivamente durante su período de detención. Se le ha recetado la dosis máxima diaria de un fármaco utilizado para tratar la ansiedad y los trastornos depresivos graves. Se le ha diagnosticado una depresión leve recurrente y también recibe medicación contra el insomnio.

17. El Sr. Laltu interpuso un recurso contra la decisión del Tribunal Administrativo de Apelación ante el Tribunal de Circuito Federal, cuya vista estaba prevista para septiembre de 2020, casi un año después de la decisión del Tribunal Administrativo de Apelación. Sin embargo, la moción ante el Tribunal de Circuito Federal se ha retirado y el Sr. Laltu sigue detenido.

18. La fuente señala que, en virtud del artículo 195A de la Ley de Migración, las facultades ministeriales que podrían utilizarse para liberar al Sr. Laltu de su detención no están sujetas a obligación ni son revisables. Aunque se han presentado algunos recursos de inconstitucionalidad contra la facultad del Ministerio de Interior de detener indefinidamente a los no ciudadanos en situación ilegal, hasta la fecha no han prosperado.

19. La fuente sostiene además que el Sr. Laltu ha sido privado de libertad como resultado del ejercicio de los derechos garantizados en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Desde que llegó a Australia, ha permanecido detenido mientras ejercía su derecho de asilo. También se le denegó el derecho a solicitar asilo hasta agosto de 2015, cuando el Ministerio de Interior levantó la prohibición de presentar una solicitud que pesaba sobre él.

20. El Sr. Laltu también ha sido privado de sus derechos en contravención del artículo 26 del Pacto, que establece que todas las personas tienen derecho a igual protección ante la ley, sin discriminación alguna. Como persona llegada por vía marítima no autorizada, el Sr. Laltu ha sido sometido al proceso de revisión rápida, de acuerdo con el cual la decisión inicial del Ministerio de Interior solo puede ser revisada por el Organismo de Evaluación en materia de Inmigración.

21. Según la fuente, el Organismo de Evaluación constituye una vía de revisión limitada que ofrece escasas oportunidades de que se lleve a cabo una reevaluación sustantiva del caso del solicitante. El proceso de revisión rápida expone a los solicitantes de asilo vulnerables a un alto riesgo de ser víctimas de errores legales, que incluyen posibles violaciones del principio de no devolución.

22. La fuente afirma que la revisión posterior del caso del Sr. Laltu determinó que no se le podía considerar una persona llegada por vía marítima no autorizada y que, por tanto, no debería haber sido sometido al proceso de revisión rápida. Ese error del Ministerio de Interior provocó largos retrasos en la tramitación del caso del Sr. Laltu y, por consiguiente, ha prolongado considerablemente el tiempo que el Sr. Laltu ha permanecido detenido.

23. El Ministerio de Interior describe la detención de inmigrantes como un último recurso empleado respecto a una proporción muy pequeña de personas cuya situación requiere ser resuelta, a veces a través de prolongados procedimientos legales. Ese no es el caso del Sr. Laltu, que fue detenido inmediatamente a su llegada y ha vivido pacíficamente y sin incidentes en instalaciones de baja seguridad durante todo el tiempo que ha estado detenido por motivos de inmigración.

24. La fuente señala que, en su observación general núm. 35 (2014), el Comité de Derechos Humanos exigió lo siguiente en relación con la detención durante los procedimientos de control de la inmigración: “deberá justificarse que es razonable, necesaria y proporcionada a la luz de las circunstancias, y revisarse a medida que se prolongue”. El Sr. Laltu lleva más de siete años en detención administrativa y sigue retenido. No existe ningún mecanismo en la legislación australiana para impugnar su detención, dado que está autorizada por la Ley de Migración y la jurisprudencia.

25. El Sr. Laltu no fue invitado a solicitar protección en virtud del artículo 46A de la Ley de Migración hasta agosto de 2015, cuando llevaba casi dos años y medio en régimen cerrado. Durante ese tiempo, no hay pruebas de que se le propusiera un visado transitorio o la libertad de circulación limitada (en virtud del artículo 195A de la Ley), a pesar de su comportamiento ejemplar y de haber sido asignado constantemente a instalaciones de baja seguridad.

26. El Tribunal Supremo de Australia ha confirmado que la detención obligatoria de los no ciudadanos es una práctica que no vulnera la Constitución. Además, el Comité de Derechos Humanos ha determinado que no existe ningún recurso efectivo para las personas sujetas a detención preceptiva en Australia.

27. La fuente sostiene que los ciudadanos australianos y los no ciudadanos no son iguales ante los tribunales y cortes de justicia de Australia. La decisión del Tribunal Supremo de Australia en la causa *Al-Kateb v. Godwin* (2004) respalda que la detención de no nacionales en aplicación, entre otras disposiciones, del artículo 189 de la Ley de Migración no contraviene la Constitución. La fuente concluye que la consecuencia efectiva de esa decisión es que, mientras los ciudadanos australianos pueden impugnar su detención administrativa, los no ciudadanos no pueden hacerlo.

#### *Respuesta del Gobierno*

28. El 29 de junio de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno en el marco de su procedimiento ordinario de comunicaciones. El Grupo de Trabajo pidió al Gobierno que, a más tardar el 28 de agosto de 2020, aportara información detallada sobre la situación actual del Sr. Laltu y aclarara las disposiciones jurídicas que justificaban que siguiera privado de libertad, así como su compatibilidad con las obligaciones contraídas por Australia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, en particular los tratados ratificados por el Estado. Además, el Grupo de Trabajo exhortó al Gobierno de Australia a que garantizara la integridad física y mental del Sr. Laltu.

29. El 6 de julio de 2020, el Gobierno solicitó una prórroga, que le fue concedida, fijándose como nuevo plazo el 28 de septiembre de 2020. El Gobierno presentó su respuesta el 28 de septiembre de 2020. En ella afirma que el Sr. Laltu es un ciudadano de Bangladesh que llegó a Australia el 12 de noviembre de 2012. En virtud del párrafo 1 del artículo 5 de la Ley de Migración, se determinó que era una persona que había entrado por una zona extracontinental, ya que se creía que había entrado en Australia por vía marítima a través de una zona extracontinental excluida de la zona de migración. Sin embargo, como consecuencia de la sentencia en la causa *DBB16 v. Minister for Immigration and Border Protection* (2018), en la que el Tribunal Federal consideró inválido que se hubiera determinado por ley que la zona de aguas dentro del Territorio de las Islas Ashmore y Cartier constituyera un puerto, el Sr. Laltu no llegó a Australia por vía marítima a través de una zona extracontinental excluida de la zona de migración y, por tanto, no es una persona llegada por vía marítima no autorizada

según la definición del artículo 5AA de la Ley. El Sr. Laltu se encuentra actualmente detenido por motivos de inmigración en el Albergue de Tránsito de Inmigrantes de Melbourne, situación que persiste por ser un no ciudadano en situación ilegal, en virtud del artículo 14 de la Ley de Migración, dado que es un no ciudadano que carece de visado válido.

30. El Sr. Laltu no es titular de un visado ordinario y actualmente no puede solicitar un visado en virtud del artículo 48 de la Ley de Migración, salvo los visados estipulados en la norma 2.12 del Reglamento de Migración de 1994, incluidos los visados de pareja, los visados de protección y determinados visados transitorios. El Sr. Laltu no cumple los criterios para presentar una solicitud válida en el continente respecto a ninguna de las clases de visado exentas, excepto para un visado transitorio E (subclase 050). Para poder presentar una solicitud válida, el Sr. Laltu debe ser clasificado como “no ciudadano que reúne las condiciones”, según la definición del artículo 72 de la Ley de Migración. Sin embargo, dado que el Sr. Laltu no tenía autorización de inmigración en el momento de su llegada, no cumple el criterio del artículo 72 1) a) para ser clasificado como “no ciudadano que reúne las condiciones”.

31. El Ministro ha determinado que el Sr. Laltu no cumple todos los criterios de la norma 2.20 1) del Reglamento de Migración. Por tanto, el Sr. Laltu no puede ser considerado un no ciudadano que reúne las condiciones de acuerdo con el artículo 72 1) b) de la Ley de Migración. Asimismo, no puede presentar una solicitud válida de visado transitorio para convertirse en un no ciudadano en situación legal. Solo puede ser liberado de la detención por motivos de inmigración si se le concede un visado, si se le expulsa de Australia o si el Ministro decide ejercer sus poderes de intervención personal, discrecional y no obligatoria para hacerlo. Los casos se remiten al Ministro para su consideración solo si el Ministerio de Interior estima que se ajustan a las directrices de intervención ministerial, que establecen los tipos de casos que deben remitirse a la consideración del Ministro.

32. El caso del Sr. Laltu ha sido evaluado o remitido al Ministro en virtud del artículo 195A de la Ley de Migración en seis ocasiones distintas. El Ministerio está examinando actualmente un expediente colectivo, que volverá a incluir el caso del Sr. Laltu, con miras a la consideración del Ministro.

33. Tras su llegada a Australia el 12 de noviembre de 2012, el Sr. Laltu fue detenido inicialmente en virtud del artículo 189 1) de la Ley de Migración y posteriormente fue trasladado al Centro de Detención de Inmigrantes de la Isla Christmas. El 15 de enero de 2013, el Ministerio inició el examen del caso del Sr. Laltu con arreglo a las directrices de intervención ministerial del artículo 195A. El 25 de enero de 2013, su caso se dio por finalizado sin ser remitido al Ministro, al considerarse que no se ajustaba a las directrices.

34. El 11 de agosto de 2015, al estimar que el Sr. Laltu era una persona llegada por vía marítima no autorizada, el Ministerio comenzó a examinar la posibilidad de una intervención ministerial en virtud del artículo 46A de la Ley de Migración, a fin de permitirle solicitar un visado de protección o de refugio. El 13 de agosto de 2015, el Ministro levantó la prohibición legal que, de conformidad con el artículo 46A de la Ley, impedía al Sr. Laltu presentar una solicitud de visado. El 28 de agosto de 2015 se invitó al Sr. Laltu a solicitar un visado.

35. El Sr. Laltu solicitó un visado de refugio el 15 de enero de 2016. Su solicitud también fue considerada como una solicitud de visado de protección. Se determinó que la solicitud de visado de protección no era válida, ya que el Sr. Laltu no era un no ciudadano que reuniera las condiciones estipuladas en virtud del artículo 72 de la Ley de Migración, dado que no tenía autorización de inmigración a su llegada en 2012. Además, el Ministro solo había intervenido en virtud del artículo 46A de la Ley para permitir al Sr. Laltu presentar una solicitud válida para los tipos de visado mencionados. Es decir, la autorización solo contemplaba que el Sr. Laltu presentara una solicitud válida de visado de refugio.

36. El 22 de abril de 2016, el Ministerio inició una nueva evaluación del caso del Sr. Laltu en virtud del artículo 195A de la Ley de Migración. Su caso fue remitido para su consideración ministerial en virtud de dicho artículo el 6 de mayo de 2016. El 11 de mayo de 2016, el Ministro decidió no considerar la posibilidad de intervenir.

37. El 12 de julio de 2016, la solicitud de visado del Sr. Laltu fue rechazada, ya que se consideró que su caso no entrañaba ninguna obligación de protección por parte de Australia

y, por tanto, no se le podía conceder un visado de protección en virtud del artículo 65 de la Ley de Migración.

38. El 14 de julio de 2016, al considerarse que el Sr. Laltu era persona llegada por vía marítima no autorizada, la decisión de denegar el visado se remitió al Organismo de Evaluación en materia de Inmigración para que revisara la decisión delegada de denegación. En virtud del artículo 473CA de la Ley de Migración, el Ministro debe remitir una decisión revisable por vía rápida a dicho Organismo tan pronto como sea razonablemente posible después de que se haya tomado la decisión.

39. El Organismo de Evaluación en materia de Inmigración es una entidad separada dentro del Tribunal de Revisión de Asuntos de Refugiados, independiente del Ministerio y del Ministro. Lleva a cabo revisiones de las decisiones revisables por vía rápida, que son las decisiones tomadas por el Ministro o por una persona delegada a fin de denegar la concesión de un visado de protección temporal a un solicitante revisable por vía rápida. Las decisiones del Organismo de Evaluación en materia de Inmigración son revisables en los tribunales federales de Australia.

40. El 16 de septiembre de 2016, el Organismo de Evaluación en materia de Inmigración confirmó la decisión delegada de rechazar la solicitud de visado del Sr. Laltu.

41. El 10 de octubre de 2016, el Ministerio inició una nueva evaluación del caso del Sr. Laltu en virtud de lo dispuesto en el artículo 195A. Su caso fue remitido para su consideración ministerial el 30 de enero de 2017. El 13 de febrero de 2017, el Ministro decidió no considerar la posibilidad de intervenir.

42. El 18 de octubre de 2016, el Sr. Laltu presentó un recurso ante el Tribunal de Circuito Federal en relación con la decisión del Organismo de Evaluación en materia de Inmigración de 16 de septiembre de 2016. El 1 de marzo de 2017, ese Tribunal desestimó el recurso.

43. El 15 de marzo de 2017, el Sr. Laltu presentó un recurso de apelación contra la decisión del Tribunal de Circuito Federal ante el Pleno del Tribunal Federal. El Sr. Laltu sostuvo que nunca presentó ninguna solicitud por la vía rápida y que, en consecuencia, no se le notificó debidamente su derecho a que la decisión de denegar su solicitud de visado fuera revisada por el Tribunal Administrativo de Apelación en virtud de la parte 7 de la Ley de Migración, en lugar de por el Organismo de Evaluación en materia de Inmigración, en virtud de la parte 7AA de la Ley.

44. El 30 de junio de 2017, el Ministerio inició una nueva evaluación del caso en virtud de lo dispuesto en el artículo 195A. El 18 de agosto de 2017 se decidió no remitir el caso al Ministro por no ajustarse a las directrices de remisión.

45. El 6 de agosto de 2018, el Pleno del Tribunal Federal admitió el recurso y anuló la decisión del Tribunal de Circuito Federal de 1 de marzo de 2017. El asunto fue remitido al Tribunal Administrativo de Apelación para su revisión. El 19 de agosto de 2018, el Sr. Laltu solicitó al Tribunal una revisión del fondo de la decisión delegada de denegación de visado de 12 de julio de 2016.

46. El 5 de septiembre de 2018, el Ministerio inició una nueva evaluación del caso del Sr. Laltu en virtud de las directrices del artículo 195A y su caso fue remitido para su consideración ministerial el 24 de septiembre de 2018. El 23 de octubre de 2018, el Ministro decidió no considerar la posibilidad de intervenir.

47. El 14 de febrero de 2019, el Ministerio informó a la entonces Ministra Adjunta sobre el caso del Sr. Laltu como parte de una sesión informativa más amplia sobre varios casos de detención prolongada. La sesión brindó una oportunidad para que la Ministra Adjunta indicara si estaba dispuesta a examinar los casos de manera individual. El 26 de febrero de 2019, la Ministra Adjunta dijo que el caso del Sr. Laltu debía ser remitido de nuevo para ser examinado en virtud de las facultades de actuación ministerial establecidas en el artículo 195A.

48. Tras la decisión de 6 de agosto de 2018 del Pleno del Tribunal Federal, el 5 de abril de 2019 el Ministerio notificó al Sr. Laltu la decisión de denegar la concesión de un visado de refugio de conformidad con el artículo 66 de la Ley de Migración. Esa repetición de la notificación era necesaria, ya que el Ministerio había notificado previamente al Sr. Laltu que

su solicitud de visado había sido denegada y que la decisión de denegación se había remitido al Organismo de Evaluación en materia de Inmigración, ya que en ese momento se le consideraba un solicitante de vía rápida. Sin embargo, el Pleno del Tribunal Federal determinó que el Sr. Laltu no era un solicitante de vía rápida y que no se le había notificado correctamente la decisión de denegar su solicitud de visado. En consecuencia, el Ministerio trató de notificar correctamente al Sr. Laltu la decisión de denegar su solicitud de visado y su derecho a solicitar la revisión de la decisión ante el Tribunal Administrativo de Apelación.

49. El 8 de abril de 2019, el Sr. Laltu presentó un nuevo recurso ante el Tribunal Administrativo de Apelación para que se revisara la decisión de denegación.

50. El 7 de mayo de 2019, el caso del Sr. Laltu fue remitido para su consideración ministerial en virtud del artículo 195A de la Ley de Migración. El 24 de julio de 2019, el ministro decidió no considerar la posibilidad de intervenir en el caso del Sr. Laltu.

51. El 11 de octubre de 2019, el Tribunal Administrativo de Apelación confirmó la decisión de denegar al Sr. Laltu un visado de refugio. El 14 de octubre de 2019, el segundo recurso presentado por el Sr. Laltu ante el Tribunal respecto a la misma decisión de denegación se declaró improcedente, ya que el Tribunal ya se había pronunciado al respecto.

52. El 20 de noviembre de 2019, el Sr. Laltu apeló la decisión del Tribunal Administrativo de Apelación del 11 de octubre de 2019 ante el Tribunal de Circuito Federal. El 27 de mayo de 2020, el Sr. Laltu retiró dicho recurso.

53. El 30 de enero de 2020, el caso del Sr. Laltu fue remitido de nuevo para su evaluación según las directrices del artículo 195A. Su caso se someterá a la consideración del Ministro como parte de un expediente colectivo. El Ministerio está examinando actualmente ese expediente. El hecho de que el proceso de intervención ministerial conforme al artículo 195A esté en curso no es un obstáculo para la expulsión del Sr. Laltu.

54. Habida cuenta de que la solicitud de visado del Sr. Laltu se ha resuelto definitivamente y que no tiene ningún litigio en curso, su caso ha sido remitido para su expulsión. Debido a su constante negativa a dialogar con los funcionarios de Solución de la Situación Migratoria con miras a su expulsión voluntaria de Australia, el Ministerio está tramitando la expulsión involuntaria del Sr. Laltu.

55. El Gobierno afirma que el Sr. Laltu tiene un historial de problemas de salud mental, de los que se ocupa el proveedor de servicios sanitarios del Ministerio, International Health and Medical Services. Recientemente, el Sr. Laltu desarrolló preocupación somática, que fue investigada sin que se encontrara una causa específica. International Health and Medical Services ha ofrecido asistencia al Sr. Laltu en relación con esa somatización y ha modificado su medicación para el estado de ánimo y el sueño con su consentimiento. Si bien el Sr. Laltu sigue experimentando ansiedad y frustración por sus circunstancias actuales, International Health and Medical Services continúa proporcionándole el apoyo sanitario y mental adecuado.

56. El 13 de mayo de 2016, el Sr. Laltu fue atendido por un médico. Se le diagnosticó un trastorno de adaptación con ansiedad y se le recetó medicación. En una revisión de seguimiento realizada el 28 de octubre de 2016, se observó que presentaba un estado de ánimo normal.

57. El 25 de noviembre de 2016, el Sr. Laltu fue atendido por un psiquiatra, que recomendó que se aumentara la medicación hasta la dosis máxima diaria en las semanas siguientes. En las citas posteriores, el 6 y el 14 de diciembre de 2016, el Sr. Laltu informó de que la medicación prescrita le ayudaba. Durante la evaluación de 2018, el Sr. Laltu volvió a manifestar que la medicación prescrita le ayudaba y que deseaba seguir tomándola.

58. El Gobierno explica que el sistema de visado universal de Australia requiere que todos los no nacionales tengan un visado válido.

59. El marco legislativo de detención de inmigrantes de Australia establece que toda persona habrá de ser detenida cuando un funcionario sepa o tenga razones fundadas para creer que dicha persona es un no nacional en situación ilegal (art. 189 de la Ley de Migración). Los no nacionales en situación ilegal han de permanecer en detención de inmigrantes hasta que se les expulse o se le conceda un visado (art. 196).

60. El artículo 195A de la Ley de Migración permite al Ministro conceder un visado a una persona detenida por motivos de inmigración. Las facultades del Ministro derivadas de ese artículo son personales y discrecionales y no están sujetas a obligación. Corresponde al Ministro decidir qué es de interés público. El Ministro ha establecido directrices que fijan los tipos de casos que deben o no deben ser remitidos para su consideración en virtud de ese artículo.

61. Las solicitudes de visados de protección son evaluadas por el Gobierno. La legislación y las políticas y prácticas de Australia están concebidas para dar cumplimiento a las obligaciones de no devolución contraídas por el país en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, modificada por el Protocolo de 1967, el Pacto y su Segundo Protocolo Facultativo y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

62. La reclusión de una persona en régimen de detención de inmigrantes so pretexto de que esa persona es un no ciudadano en situación ilegal no es arbitraria de por sí en virtud del derecho internacional. La detención prolongada puede volverse arbitraria si transcurre cierto tiempo y no se ha esgrimido la debida justificación. En casos de privación prolongada de la libertad, el factor determinante no es la duración de la reclusión, sino si los motivos están justificados. El caso del Sr. Laltu ha sido remitido repetidamente para su consideración ministerial en virtud de las facultades de intervención emanadas del artículo 195A. Las facultades del Ministro derivadas de ese artículo de la Ley de Migración no están sujetas a obligación. El Sr. Laltu es un no ciudadano en situación ilegal, y dado que no fue autorizado como inmigrante a su llegada, no cumple los criterios para ser clasificado como no ciudadano que reúne las condiciones estipuladas con arreglo al artículo 72 1) a) de la Ley. Solo podría convertirse en no ciudadano que reúne las condiciones estipuladas si recayera en una de las categorías de personas prescritas a tal efecto en virtud del artículo 72 1) b) o si el Ministro determina que es un no ciudadano que reúne las condiciones estipuladas en virtud del artículo 72 1) c).

63. El artículo 72 1) b) de la Ley de Migración permite definir como no ciudadanos que reúnen las condiciones estipuladas a las categorías prescritas de personas, tal como se establece en la norma 2.20 del Reglamento de Migración. En caso de que se le atribuyera esa definición, el Sr. Laltu también podría verificar si reúne las condiciones en relación con el punto 1305 3) ba) del anexo 1 del Reglamento. Por tanto, no parece haber ningún impedimento para que presente una solicitud válida de visado transitorio (subclase 050).

64. La norma 2.20 1) del Reglamento de Migración dispone que a los efectos de la definición de no ciudadano que reúne las condiciones del artículo 72 1) b) de la Ley, se establecen las categorías de personas descritas en los numerales 6) a 12) y 14) a 17).

65. Debido a su constante negativa a colaborar con los funcionarios de Solución de la Situación Migratoria respecto a su expulsión voluntaria, a fecha de 3 de junio de 2020, el Sr. Laltu no cumplía las condiciones del apartado 2.20 12) c) del Reglamento de Migración. Por tanto, el Sr. Laltu no puede presentar una solicitud válida de visado transitorio. Además, se ha determinado que no se le debe protección; antes de la finalización de sus litigios en mayo de 2020, el Ministerio no había podido devolverlo a su país debido a los procesos de fondo y de revisión judicial en curso.

66. La detención de inmigrantes es de naturaleza administrativa. El Gobierno vela por que todas las personas privadas de libertad por motivos de inmigración reciban un trato acorde con las obligaciones jurídicas internacionales de Australia. La detención por motivos de inmigración del Sr. Laltu es legal porque es un no ciudadano en situación ilegal. La detención en curso del Sr. Laltu es justificable y no es arbitraria en el contexto del Pacto, ya que el Ministerio de Interior está tramitando la expulsión del Sr. Laltu de Australia.

67. En cuanto a los mecanismos de revisión disponibles, el Ministerio está obligado, en virtud del artículo 486N de la Ley de Migración, a proporcionar al Defensor del Pueblo del Commonwealth informes en los que se detallen las circunstancias de las personas que han sido detenidas en virtud del artículo 189 de la Ley durante un período acumulado de dos años y cada seis meses a partir de entonces. Tras recibir los informes del Ministerio, el Defensor del Pueblo del Commonwealth prepara evaluaciones independientes de las circunstancias del individuo y proporciona al Ministro un informe en virtud del artículo 486O de la Ley. El



Defensor del Pueblo del Commonwealth puede hacer recomendaciones al Ministro o al Ministerio en relación con las circunstancias de personas concretas, incluido su internamiento. El Ministerio ha informado sobre las circunstancias del Sr. Laltu en 12 ocasiones, y el informe más reciente se envió al Defensor del Pueblo del Commonwealth el 29 de mayo de 2020. Otro informe en relación con el Sr. Laltu en virtud del artículo 486N de la Ley deberá presentarse en noviembre de 2020, a menos que sea expulsado antes.

68. El Defensor del Pueblo del Commonwealth ha proporcionado al Ministro seis evaluaciones en virtud del artículo 486O de la Ley de Migración, la más reciente el 2 de diciembre de 2019. La versión anónima de la evaluación y la respuesta del Ministro se presentaron al Parlamento el 6 de febrero de 2020.

69. El Comité de Revisión de Detenciones del Ministerio sigue revisando mensualmente la detención del Sr. Laltu en el marco de los procesos de gestión de casos. Además, el Defensor del Pueblo continúa realizando una evaluación de las condiciones en las que se encuentra detenido el Sr. Laltu cada seis meses.

70. Una persona que se encuentre en régimen de detención de inmigrantes puede solicitar la revisión judicial de la legalidad de su privación de libertad ante el Tribunal Federal o el Tribunal Supremo de Australia. El artículo 75 v) de la Constitución dispone que el Tribunal Supremo es el órgano de primera instancia en todos los asuntos en los que se presenta una solicitud de mandamiento judicial, prohibición o requerimiento contra un funcionario del Commonwealth. El artículo 39B 1) de la Ley del Poder Judicial, de 1903, otorga al Tribunal Federal la misma competencia de la que goza el Tribunal Supremo en virtud del artículo 75 v) de la Constitución. Estas disposiciones recogen el mecanismo legal para que un no nacional pueda recurrir la legalidad de su detención, es decir, recurrir la aplicación legal del artículo 189 de la Ley de Migración.

71. El Gobierno alega asimismo que, en la causa *Al-Kateb v. Godwin* (2004), el Tribunal Supremo decretó la legalidad de las disposiciones de la Ley de Migración que exigen la reclusión de los no ciudadanos hasta que sean expulsados o se les conceda un visado, incluso cuando su expulsión no sea razonablemente factible en un futuro cercano. La decisión adoptada en ese caso no afecta a la posibilidad de que un no nacional recurra la legalidad de su detención con arreglo a la legislación australiana. Además, los no ciudadanos también pueden impugnar la legalidad de su reclusión por medios tales como el habeas corpus. Los mecanismos descritos anteriormente señalan que, con arreglo a la Constitución, los no ciudadanos siguen teniendo derecho a interponer un recurso contra un funcionario del Commonwealth.

72. El sistema de visado universal de Australia contempla dos situaciones: la de los no nacionales en situación legal y la de los no nacionales en situación ilegal. Un no nacional que se encuentre en Australia sin un visado en vigor es un no nacional en situación ilegal (arts. 13 y 14 de la Ley de Migración). El artículo 189 1) de la Ley establece que los agentes están obligados a detener a toda persona de la que tengan conocimiento que se trata de un no nacional en situación ilegal o una sospecha fundada de que lo es. Asimismo, la fuente recuerda que el artículo 196 3) de la Ley dispone de manera específica que ni siquiera los tribunales pueden poner en libertad a un no ciudadano en situación ilegal detenido por motivos de inmigración a menos que se le haya concedido un visado. Sin embargo, los tribunales tienen la capacidad de determinar si una persona es o no, de hecho, un no ciudadano en situación ilegal.

73. Nada de lo dispuesto en la Ley de Migración impide que un tribunal determine la aplicación de lo dispuesto en el artículo 189 1) e imponga su cumplimiento. Por tanto, recae en los detenidos por motivos de inmigración el impugnar su detención ante los tribunales sobre la base de que el funcionario correspondiente no puede albergar una sospecha razonable de que la persona es un no ciudadano en situación ilegal. La base del recurso puede ser que la persona en cuestión posea de hecho un visado en vigor y sea un no nacional en situación legal, o bien que no se trate de un no nacional, sino de un nacional australiano. De convenir en ello el tribunal, puede ordenar la puesta en libertad de la persona. Lo dispuesto en el artículo 196 3) no obsta para que el tribunal adopte tal decisión, pues habría de tratarse de un no nacional en situación legal o de un no nacional.

74. El Sr. Laltu ha tenido y aprovechado la oportunidad de solicitar la revisión judicial de las decisiones de migración que le conciernen. El 18 de octubre de 2016, presentó ante el Tribunal de Circuito Federal una solicitud de revisión judicial de la decisión del Organismo de Evaluación en materia de Inmigración de 16 de septiembre de 2016. El 15 de marzo de 2017, solicitó al Pleno del Tribunal Federal la revisión de la decisión del Tribunal de Circuito Federal. El 19 de agosto de 2018 y el 8 de abril de 2019, solicitó al Tribunal Administrativo de Apelación una revisión de fondo de la decisión delegada de denegarle el visado.

75. La fuente sostiene que el Sr. Laltu ha sido privado del derecho garantizado en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Gobierno señala que, si bien fue proclamada por la Asamblea General, la Declaración Universal de Derechos Humanos no crea obligaciones legales vinculantes para los firmantes. No obstante, el Gobierno aduce que el Sr. Laltu está privado de libertad legalmente por ser un no ciudadano en situación ilegal, como exige el artículo 189 de la Ley de Migración. El Gobierno reitera que no se expulsará a una persona cuando con ello se incumplan las obligaciones de no devolución de Australia, incluso en circunstancias en las que se le haya denegado un visado de protección.

76. En respuesta a la afirmación de que el Sr. Laltu ha sido privado de libertad en contravención del artículo 26 del Pacto, el Gobierno señala que el objeto de la Ley de Migración es regular, en aras del interés nacional, la entrada y la estancia de no ciudadanos en Australia. El propósito de la Ley es diferenciar, en función de la nacionalidad, entre no nacionales y nacionales. El Gobierno recuerda que el Comité de Derechos Humanos, en su observación general núm. 15 (1986), declaró que el Pacto no reconoce a los extranjeros el derecho a entrar en el territorio de un Estado parte ni de residir en él. En principio, corresponde al Estado decidir a quién ha de admitir en su territorio (párr. 5).

77. Los artículos 12 y 13 del Pacto implican que los Estados partes tienen derecho, en virtud del derecho internacional, a controlar la residencia, la entrada y la expulsión de los extranjeros. El Gobierno concluye que le corresponde a él determinar, de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, quién puede entrar en su territorio y en qué condiciones, por ejemplo mediante la exigencia de que los no ciudadanos estén en posesión de un visado para poder entrar y permanecer legalmente en Australia o, en caso de no disponer de él, sean objeto de detención de inmigrantes.

78. En la medida en que existe un trato diferenciado entre ciudadanos y no ciudadanos en el sentido de que los ciudadanos australianos no están sujetos a la detención por motivos de inmigración, el Gobierno sostiene que el trato diferenciado no es discriminatorio y no viola el artículo 26 del Pacto, ya que está dirigido a lograr un propósito que es legítimo, está basado en criterios razonables y objetivos, y es proporcional al fin que se pretende alcanzar.

79. El Gobierno afirma que el trato diferenciado en la Ley de Migración entre nacionales y no nacionales tiene el objetivo legítimo de garantizar la integridad del programa de migración australiano, evaluar la identidad y la salud de los no ciudadanos ilegales y si representan algún riesgo para la seguridad, y proteger a la comunidad. Esta Ley está en conformidad con los artículos 12 y 13 del Pacto. Cualquier diferencia de trato entre ciudadanos y no ciudadanos se basa en criterios razonables y objetivos y tiene un propósito legítimo, por lo que no entraña una discriminación prohibida por el Pacto.

80. El Gobierno afirma que el Sr. Laltu está legalmente detenido en virtud del artículo 189 1) de la Ley de Migración, hecho que es coherente con las obligaciones internacionales de Australia.

#### *Comentarios adicionales de la fuente*

81. La respuesta del Gobierno se transmitió a la fuente para que formulara nuevos comentarios, que esta presentó el 13 de octubre de 2020. En sus comentarios, la fuente señala que la detención de un no ciudadano en situación ilegal está permitida por la legislación australiana. También señala que la respuesta del Gobierno es similar a sus respuestas anteriores.

82. La fuente informa de un caso reciente en que el Tribunal Federal consideró que una detención por motivos de inmigración era ilegal, lo que motivó que la persona afectada fuera

liberada tras un recurso de hábeas corpus<sup>1</sup>. Aunque ese caso es pertinente para muchos inmigrantes detenidos, no lo es para el Sr. Laltu, ya que el proceso de resolución de su situación ha estado en curso durante varios años.

83. La fuente señala que resulta engañoso sugerir que se está tramitando la solicitud de visado de protección del Sr. Laltu. La solicitud de visado del Sr. Laltu no se encuentra en la fase de examen por parte de los ministros, sino que el Ministerio de Interior aún la está examinando con respecto a las directrices a fin de decidir si la remite a los ministros para su consideración. También es engañoso sugerir que, después de haber denegado el visado al Sr. Laltu en numerosas ocasiones, el Ministerio fuera en esta ocasión a concluir que el Sr. Laltu cumple los criterios para la remisión de la solicitud a los ministros, y que estos decidirían la concesión del visado.

84. Además, el proceso de remisión ministerial es un proceso de decisión ministerial personal no revisable y no sujeta a obligación. Las propuestas van y vienen del Ministerio de Interior a los ministros sin resolverse durante años. Esa es la situación del Sr. Laltu. En lugar de depender de las facultades personales no discrecionales y no revisables de los ministros, las decisiones relativas a los solicitantes de asilo detenidos prolongadamente y de casos complejos deberían ser revisadas de forma periódica por un comité de expertos que incluya a expertos en cuestiones jurídicas, sanitarias y de políticas. Esto proporcionaría un mecanismo de revisión independiente y oportuno para estos casos.

85. La fuente señala que los mecanismos de revisión de la detención vigentes en el marco jurídico australiano permiten la detención arbitraria. El Defensor del Pueblo del Commonwealth no está facultado para obligar al Ministerio de Interior a liberar a una persona detenida por motivos de inmigración. El Ministerio se ha abstenido sistemáticamente de aplicar las recomendaciones del Defensor del Pueblo de que se ponga en libertad a los solicitantes de asilo y a los refugiados detenidos. Además, el Comité de Revisión de Detenciones del Ministerio no es un organismo independiente.

86. La fuente reitera que la sentencia en la causa *Al-Kateb v. Godwin* refuerza la posición del Sr. Laltu, dado que el derecho australiano autoriza su detención arbitraria indefinida.

87. La fuente afirma que los mecanismos de revisión disponibles para el Sr. Laltu mencionados en la respuesta del Gobierno se refieren al proceso de toma de decisiones relativo a la concesión de un visado y no a la detención del Sr. Laltu.

### **Deliberaciones**

88. El Grupo de Trabajo agradece a la fuente y al Gobierno la información oportuna y detallada que le facilitaron en sus comunicaciones.

89. Para determinar si la privación de libertad del Sr. Laltu es arbitraria, el Grupo de Trabajo tiene en cuenta los principios establecidos en su jurisprudencia sobre cómo proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones. La mera afirmación de que se han seguido los procedimientos legales no basta para refutar las presunciones de la fuente (A/HRC/19/57, párr. 68).

90. La fuente ha afirmado, y el Gobierno no lo ha discutido, que el Sr. Laltu llegó a Australia en noviembre de 2012, en una embarcación. El Gobierno afirma que el Sr. Laltu fue detenido el 12 de noviembre de 2012 y trasladado al centro de detención de la isla Christmas. El Ministerio de Inmigración y Ciudadanía fue la autoridad encargada de la detención y el motivo de la misma fue la entrada no autorizada en Australia por vía marítima. Desde entonces, el Sr. Laltu ha permanecido en detención de inmigrantes como no ciudadano en situación ilegal. El Gobierno sostiene que el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, si bien fue proclamado por la Asamblea General, no crea obligaciones legales vinculantes para los firmantes. No obstante, el Gobierno aduce que el Sr. Laltu está

<sup>1</sup> Véase *AJL20 v. Commonwealth of Australia* (2020). Disponible en el sitio web <https://jade.io/article/764869>.

privado de libertad legalmente por ser un no ciudadano en situación ilegal, como exige el artículo 189 de la Ley de Migración.

91. El Gobierno rechaza la afirmación de que haya habido una vulneración del artículo 26 del Pacto, ya que el objeto de la Ley de Migración es regular la llegada de no ciudadanos a Australia, por lo que, por definición, no es aplicable a sus ciudadanos. El Gobierno se remite a la observación general núm. 15 (1986) del Comité de Derechos Humanos, en la que este establece que el Pacto no reconoce a los extranjeros el derecho a entrar en el territorio de un Estado parte ni de residir en él y que, en principio, corresponde al Estado decidir a quién ha de admitir en su territorio.

92. El Grupo de Trabajo señala que no se discute que el Sr. Laltu lleve más de ocho años detenido por motivos de inmigración. Según el Gobierno, el 15 de enero de 2013, el Ministerio inició el examen del caso del Sr. Laltu con arreglo a las directrices de intervención ministerial del artículo 195A. El 25 de enero de 2013 se puso fin al proceso sin que se remitiera el caso al Ministro, ya que se consideró que no se ajustaba a las directrices. A partir de entonces, no hubo ninguna actuación respecto al caso del Sr. Laltu hasta el 11 de agosto de 2015, cuando se le permitió solicitar un visado. A esto le siguió una serie de solicitudes de visado, todas ellas rechazadas, y los recursos correspondientes. Durante todo este tiempo y hasta la fecha, el Sr. Laltu ha permanecido detenido.

93. Como ha señalado el Grupo de Trabajo en su deliberación revisada núm. 5 (A/HRC/39/45, anexo, párr. 12): “Cualquier forma de detención o custodia administrativa en el contexto de la migración debe ser aplicada como medida excepcional de último recurso, por el período más breve posible y únicamente si se justifica por una finalidad legítima, tal como documentar la entrada, registrar alegaciones o verificar inicialmente la identidad en caso de duda”.

94. Esto coincide con el parecer expresado por el Comité de Derechos Humanos en el párrafo 18 de su observación general núm. 35 (2014), relativa a la libertad y la seguridad personales:

Los solicitantes de asilo que entran ilegalmente en el territorio de un Estado parte pueden ser privados de libertad durante un breve período inicial con el fin de documentar su entrada, dejar constancia de sus alegaciones, y determinar su identidad si hay dudas sobre ella. Prolongar su privación de libertad mientras se resuelven sus alegaciones sería arbitrario de no existir razones particulares específicamente en relación con esa persona, como una probabilidad concreta de fuga, el peligro de que cometa un delito contra otras personas, o el riesgo de que lleve a cabo actos contra la seguridad nacional.

95. En el presente caso, el Sr. Laltu fue detenido inmediatamente después de su llegada y ha permanecido detenido durante más de ocho años. Es evidente para el Grupo de Trabajo que, cuando se examinó su caso el 15 de enero de 2013, el Gobierno no llevó a cabo una evaluación de la necesidad de mantener al Sr. Laltu privado de libertad y que no hubo ningún intento de determinar si una medida menos restrictiva sería adecuada en sus circunstancias individuales, como exige el derecho internacional. De hecho, a lo largo de su estancia en Australia, nunca ha habido un intento por parte de las autoridades australianas de hacerlo. El Grupo de Trabajo no puede aceptar que un período de detención de ocho años sea descrito como “breve período inicial”, retomando el término empleado por el Comité de Derechos Humanos. Además, el Gobierno no ha presentado ninguna razón particular referida específicamente al Sr. Laltu, como una probabilidad personal de fuga, el peligro de que cometa un delito contra otras personas, o el riesgo de que lleve a cabo actos contra la seguridad nacional, que hubiera justificado su detención inicial.

96. Estas dos omisiones del Gobierno llevan al Grupo de Trabajo a concluir que no había otra razón para detener al Sr. Laltu más allá del hecho de que fuera solicitante de asilo y, por tanto, estuviera sujeto a la política de Australia de detención automática de inmigrantes, de conformidad con la Ley de Migración. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que el Sr. Laltu fue privado de libertad por ejercer los derechos legítimos que lo amparaban en virtud del artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

97. Además, si bien el Grupo de Trabajo está de acuerdo con el argumento presentado por el Gobierno en relación con el artículo 26 del Pacto, debe sin embargo destacar que en la misma observación general citada por el Gobierno, la núm. 15 (1986), el Comité de Derechos Humanos también aclara que “los extranjeros se benefician del requisito general de no discriminación respecto de los derechos garantizados [en el Pacto], conforme al artículo 2 del Pacto” (párr. 2), y que “los extranjeros tienen pleno derecho a la libertad y a la seguridad personales” (párr. 7)<sup>2</sup>.

98. Por consiguiente, el Sr. Laltu tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, garantizado en el artículo 9 del Pacto, y Australia debe garantizárselo sin distinción alguna, como establece el artículo 2 del Pacto. En el presente caso, el Sr. Laltu está sometido a una detención indefinida *de facto* debido a su condición de inmigrante, en clara vulneración del artículo 2, leído junto con el artículo 9 del Pacto.

99. En consecuencia, dado que el Sr. Laltu ha sido detenido debido al ejercicio legítimo de sus derechos en virtud del artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los artículos 2 y 9 del Pacto, el Grupo de Trabajo considera que su detención es arbitraria y se inscribe en la categoría II. Al formular esta conclusión, el Grupo de Trabajo señala la afirmación del Gobierno de que el Sr. Laltu siempre ha sido tratado de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Migración. Este trato no es compatible con las obligaciones que Australia ha contraído en virtud del derecho internacional (véanse también los párrafos 114 a 116 *infra*). El Grupo de Trabajo remite también el presente caso al Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes para que adopte las medidas apropiadas.

100. La fuente ha aducido además que el Sr. Laltu ha sido objeto de una detención administrativa prolongada sin posibilidad de un examen o recurso administrativo o judicial. El Gobierno rechaza estas alegaciones, aduciendo que una persona que se encuentre en régimen de detención de inmigrantes puede solicitar la revisión judicial de la legalidad de su privación de libertad ante el Tribunal Federal o el Tribunal Supremo de Australia y que el caso del Sr. Laltu ha sido revisado por el Defensor del Pueblo del Commonwealth y el Comité de Revisión de Detenciones.

101. El Grupo de Trabajo recuerda que, con arreglo a los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, el derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal es un derecho humano autónomo que es esencial para preservar la legalidad en una sociedad democrática<sup>3</sup>. Este derecho, que en realidad constituye una norma imperativa del derecho internacional, se aplica a todas las formas de privación arbitraria de la libertad<sup>4</sup> y a todas las situaciones de privación de libertad, incluida no solo la detención a efectos de un proceso penal, sino también la detención de migrantes<sup>5</sup>.

102. Los hechos del caso del Sr. Laltu acaecidos desde su detención el 12 de noviembre de 2012, tal y como se presentaron al Grupo de Trabajo, reúnen varias solicitudes de visado, los rechazos de dichas solicitudes y los recursos correspondientes. Sin embargo, como se ha observado anteriormente, ninguno de los procesos se ha centrado en la necesidad de mantener detenido al Sr. Laltu. También ha habido numerosos exámenes del Comité de Gestión de Casos y Revisión de la Detención, que, según el Gobierno, ha examinado repetidamente si la detención del Sr. Laltu era legal y razonable. No obstante, como el Grupo de Trabajo ya ha indicado claramente en opiniones anteriores<sup>6</sup>, el Comité de Gestión de Casos y Revisión de la Detención no es un órgano judicial como exige el artículo 9, párrafo 4, del Pacto. El Grupo de Trabajo señala que el Gobierno nunca ha explicado de qué modo los exámenes realizados

<sup>2</sup> Deliberación revisada núm. 5, párrs. 2 y 7.

<sup>3</sup> A/HRC/30/37, párrs. 2 y 3.

<sup>4</sup> *Ibid.*, párr. 11.

<sup>5</sup> *Ibid.*, párr. 47 a).

<sup>6</sup> Opiniones núm. 20/2018, párr. 61; núm. 50/2018, párr. 77; núm. 74/2018, párr. 112; y núm. 1/2019, párr. 80.

por el Comité cumplen las garantías del derecho a impugnar la legalidad de la detención consagradas en el artículo 9 del Pacto<sup>7</sup>.

103. El Gobierno también ha argumentado que el caso del Sr. Laltu está siendo revisado periódicamente por el Defensor del Pueblo del Commonwealth. Sin embargo, una vez más, al hacerlo, el Gobierno no ha explicado el modo en que dicha revisión satisface el requisito del artículo 9, párrafo 4, de que un órgano judicial revise la legalidad de la detención. El Grupo de Trabajo tiene particularmente en cuenta que el Defensor del Pueblo del Commonwealth no tiene competencia para obligar al Ministerio a poner en libertad a una persona que se encuentre detenida por cuestiones de inmigración.

104. El Gobierno también ha argumentado que el Ministro ha revisado la detención del Sr. Laltu, pero una vez más, dado que la revisión corrió a cargo de un órgano ejecutivo, el Grupo de Trabajo señala que no se han cumplido los criterios del párrafo 4 del artículo 9 del Pacto.

105. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que, durante sus ocho años de detención, ningún órgano judicial ha participado nunca en la evaluación de la legalidad de la detención del Sr. Laltu, y señala que esa consideración por un órgano judicial implicaría necesariamente la evaluación de la legitimidad, la necesidad y la proporcionalidad de la detención<sup>8</sup>.

106. En este sentido, el Grupo de Trabajo desea retomar el argumento presentado por el Gobierno de que la detención prolongada en el contexto de la inmigración es lícita con arreglo al derecho internacional siempre que los motivos de la detención sean justificables, y que la duración de esta no es un factor determinante<sup>9</sup>. A juicio del Grupo de Trabajo, se trata de una interpretación errónea del derecho internacional de los derechos humanos aplicable. El Grupo de Trabajo pone de relieve que la detención indefinida de personas durante los procedimientos de migración no puede justificarse y es arbitraria<sup>10</sup>, por lo que ha exigido que se establezca por ley un período máximo de detención en el curso de los procedimientos de migración y que, al expirar dicho período de detención, la persona detenida sea puesta en libertad automáticamente<sup>11</sup>.

107. El Grupo de Trabajo rechaza la alegación de que la duración de la reclusión no es, en sí misma, un factor determinante y de que, siempre que existan motivos que la justifiquen, esta puede continuar de manera legal. Aceptar este razonamiento supondría aceptar que las personas podrían quedar atrapadas en un ciclo interminable de revisiones periódicas de su detención sin ninguna perspectiva real de ser puestas en libertad. Esa situación es similar a la detención indefinida, y no se puede resolver ni siquiera con los más eficaces exámenes periódicos de la detención<sup>12</sup>. Como el Grupo de Trabajo explicó en su deliberación revisada núm. 5 (párr. 27):

Puede haber casos en que el impedimento para identificar a personas en situación irregular o expulsarlas del territorio no sea atribuible a ellas —como la falta de cooperación de la representación consular del país de origen, el principio de no devolución<sup>13</sup> o la falta de medios de transporte—, y haga que la expulsión no pueda llevarse a cabo. En esos casos, la persona detenida debe ser puesta en libertad para evitar una detención que podría durar indefinidamente y que sería, por tanto, arbitraria<sup>14</sup>.

<sup>7</sup> Opiniones núm. 20/2018, párr. 61; núm. 50/2018, párr. 77; núm. 74/2018, párr. 112; y núm. 1/2019, párr. 80.

<sup>8</sup> Deliberación revisada núm. 5, párrs. 12 y 13.

<sup>9</sup> Opiniones núm. 74/2019, párrs. 69 y 70, y núm. 35/2020, párrs. 90 y 91.

<sup>10</sup> Deliberación revisada núm. 5, párr. 18, opiniones núm. 28/2017, núm. 42/2017, núm. 7/2019 y núm. 35/2020 y A/HRC/13/30, párr. 63.

<sup>11</sup> Deliberación revisada núm. 5, párr. 25, A/HRC/13/30, párr. 61, y opinión núm. 7/2019.

<sup>12</sup> Véanse las opiniones núm. 1/2019 y 7/2019.

<sup>13</sup> Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, art. 3, y Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, art. 33.

<sup>14</sup> A/HRC/13/30, párr. 63, A/HRC/10/21, párr. 82, A/HRC/7/4, párr. 48, y opinión núm. 45/2006.

108. El Grupo de Trabajo recuerda también las numerosas conclusiones del Comité de Derechos Humanos en las que se ha determinado que la aplicación de la detención preceptiva de inmigrantes en Australia y la imposibilidad de impugnar dicha detención infringen el artículo 9, párrafo 1, del Pacto<sup>15</sup>. Además, como señala el Grupo de Trabajo en su deliberación revisada núm. 5, la detención en el contexto de la migración debe ser excepcional (párr. 12) y, para garantizarlo, deben buscarse alternativas a la detención (párr. 16)<sup>16</sup>. En el caso del Sr. Laltu, el Grupo de Trabajo ya ha establecido que, desde su detención el 12 de noviembre de 2012, no se han considerado alternativas a la detención.

109. Además, a pesar de las afirmaciones del Gobierno en sentido contrario, el Grupo de Trabajo considera que la detención del Sr. Laltu es de hecho de carácter punitivo. Como señala el Grupo de Trabajo en su deliberación revisada núm. 5, esto nunca debería ser así (párrs. 9 y 14)<sup>17</sup>. El Sr. Laltu ha permanecido detenido más de ocho años, sin cargos ni juicio, lo que fue claramente una detención punitiva en violación del artículo 9 del Pacto.

110. Aunque el Gobierno afirma que el caso del Sr. Laltu se está tramitando con miras a su expulsión involuntaria, el Grupo de Trabajo señala que esa decisión, según el Gobierno, se tomó el 20 de enero de 2020. Sin embargo, el Sr. Laltu continúa privado de libertad desde el 12 de noviembre de 2012. Este es claramente un caso de detención indefinida. No obstante, como se indica en la deliberación revisada núm. 5, la privación indefinida de la libertad de las personas durante la tramitación de los procedimientos de migración no puede justificarse y es arbitraria (párr. 26)<sup>18</sup>. Por ello, el Grupo de Trabajo ha exigido que se establezca por ley un período máximo de privación de libertad durante los procedimientos de migración y que esta pueda aplicarse únicamente durante el período más breve posible<sup>19</sup>. No existe ninguna perspectiva clara del momento en que el Sr. Laltu podría ser puesto en libertad. Ni siquiera el propio Gobierno ha podido ofrecer indicación alguna al respecto en su respuesta al Grupo de Trabajo.

111. En consecuencia, el Grupo de Trabajo considera que el Sr. Laltu está sometido a una detención indefinida *de facto* debido a su condición de inmigrante, sin la posibilidad de impugnar la legalidad de dicha detención ante un órgano judicial, derecho consagrado en el párrafo 4 del artículo 9 del Pacto. Así, pues, su detención es arbitraria y se inscribe en la categoría IV. Al formular esta conclusión, el Grupo de Trabajo recuerda las numerosas conclusiones del Comité de Derechos Humanos en las que este ha considerado que la detención obligatoria de inmigrantes en Australia y la imposibilidad de impugnarla contravenían el artículo 9 del Pacto<sup>20</sup>.

112. El Grupo de Trabajo señala el argumento presentado por la fuente de que, por ser no ciudadano, y como consecuencia de la decisión del Tribunal Supremo en la causa *Al-Kateb v. Godwin*, el Sr. Laltu parece encontrarse en una situación diferente a los ciudadanos australianos en lo que respecta a su capacidad para impugnar de manera efectiva la legalidad de su reclusión ante los tribunales nacionales. La consecuencia de esa decisión es que, mientras los ciudadanos australianos pueden impugnar su detención administrativa, los no ciudadanos no pueden hacerlo. El Gobierno se muestra en desacuerdo con esas afirmaciones y alega que, en esa causa, el Tribunal Supremo decretó la legalidad de las disposiciones de

<sup>15</sup> Véase *C. c. Australia* (CCPR/C/76/D/900/1999); *Baban y Baban c. Australia* (CCPR/C/78/D/1014/2001); *Shafiq c. Australia* (CCPR/C/88/D/1324/2004); *Shams y otros c. Australia* (CCPR/C/90/D/1255,1256,1259,1260,1266,1268,1270 y 1288/2004); *Bakhtiyari y otros c. Australia* (CCPR/C/79/D/1069/2002); *D y E y sus dos hijos c. Australia* (CCPR/C/87/D/1050/2002); *Nasir c. Australia* (CCPR/C/116/D/2229/2012); y *F. J. y otros c. Australia* (CCPR/C/116/D/2233/2013).

<sup>16</sup> A/HRC/13/30, párr. 59, E/CN.4/1999/63/Add.3, párr. 33, A/HRC/19/57/Add.3, párr. 68 e), A/HRC/27/48/Add.2, párr. 124, A/HRC/30/36/Add.1, párr. 81, y opiniones núm. 72/2017 y núm. 21/2018.

<sup>17</sup> Opinión núm. 49/2020, párr. 87.

<sup>18</sup> A/HRC/13/30, párr. 63, y las opiniones núm. 42/2017 y núm. 28/2017.

<sup>19</sup> Deliberación revisada núm. 5, párr. 26. opiniones núm. 5/2009 y núm. 42/2017; E/CN.4/1999/63/Add.3, párr. 35; y A/HRC/33/50/Add.1, párrs. 49 y 50.

<sup>20</sup> Véanse *C. c. Australia*; *Baban y Baban contra Australia*; *Shafiq c. Australia*; *Shams y otros c. Australia*; *Bakhtiyari y otros c. Australia*; *D y E y sus dos hijos c. Australia*; *Nasir c. Australia*; y *F. J. y otros c. Australia*.

la Ley de Migración que exigen la reclusión de los no ciudadanos hasta que sean expulsados o se les conceda un visado, incluso cuando su expulsión no sea razonablemente factible en un futuro cercano.

113. El Grupo de Trabajo señala que el Gobierno había esgrimido las mismas explicaciones sobre la decisión del Tribunal Supremo en numerosas ocasiones anteriores, que habían sido rechazadas por el Grupo de Trabajo<sup>21</sup>. Las explicaciones no hacen sino refrendar que el Tribunal Supremo decretó la legalidad de la reclusión de los no ciudadanos hasta que sean expulsados o se les conceda un visado, incluso cuando su expulsión no sea razonablemente factible en un futuro cercano.

114. El Grupo de Trabajo ha señalado que el Gobierno no explica cómo pueden esos no nacionales recurrir de manera efectiva su detención prolongada después de esta decisión del Tribunal Supremo, que es lo que el Gobierno debe aclarar para dar cumplimiento a los artículos 9 y 26 del Pacto. A ese respecto, el Grupo de Trabajo recuerda una vez más la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos, que examinó las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo en la causa *Al-Kateb v. Godwin* y llegó a la conclusión de que el efecto de esa sentencia implicaba que no existía un recurso efectivo para impugnar la legalidad de la detención administrativa prolongada<sup>22</sup>.

115. En el pasado, el Grupo de Trabajo ha coincidido con las opiniones del Comité de Derechos Humanos sobre esta cuestión<sup>23</sup>, y esta sigue siendo su posición en el presente caso. El Grupo de Trabajo subraya que esta situación es discriminatoria y contraria al artículo 26 del Pacto. Por consiguiente, concluye que la privación de libertad del Sr. Laltu es arbitraria y se inscribe en la categoría V.

#### *Ley de Migración de 1958*

116. El Grupo de Trabajo señala que el presente caso es el último de una serie de casos procedentes de Australia que se han sometido al Grupo de Trabajo desde 2017, referidos todos ellos a la misma cuestión, a saber, la detención preceptiva de inmigrantes en Australia de conformidad con la Ley de Migración<sup>24</sup>. El Grupo de Trabajo reitera sus opiniones sobre la Ley de Migración, expresadas recientemente en la opinión núm. 35/2020 (párrs. 98 a 103).

117. El Grupo de Trabajo está alarmado por el creciente número de casos procedentes de Australia relativos a la aplicación de la Ley de Migración de 1958 que se están señalando a su atención. Le preocupa asimismo que, en todos ellos, el Gobierno haya sostenido que la detención es legal porque se ajusta a lo que estipula dicha Ley. El Grupo de Trabajo desea aclarar que ese argumento nunca puede aceptarse como legítimo en el derecho internacional de los derechos humanos. El hecho de que un Estado aplique su legislación interna no quiere decir en sí mismo que esta se ajuste a las obligaciones que el Estado ha contraído en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Ningún Estado puede eludir legítimamente sus obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos amparándose en sus leyes y reglamentos internos.

118. El Grupo de Trabajo subraya que el Gobierno de Australia tiene el deber de armonizar su legislación nacional, incluida la Ley de Migración de 1958, con las obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Desde 2017, numerosos órganos de derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos<sup>25</sup>, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales<sup>26</sup>, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer<sup>27</sup>, el Comité para la Eliminación de la Discriminación

<sup>21</sup> Véanse las opiniones núm. 21/2018, párr. 79, núm. 50/2018, párr. 81, núm. 74/2018, párr. 117, núm. 1/2019, párr. 88, núm. 2/2019, párr. 98, núm. 74/2019, párr. 72, y núm. 35/2020, párrs. 95 y 96.

<sup>22</sup> Véase *F. J. y otros c. Australia*.

<sup>23</sup> Véanse las opiniones núm. 28/2017, núm. 42/2017, núm. 71/2017, núm. 20/2018, núm. 21/2018, núm. 50/2018, núm. 74/2018, núm. 1/2019, núm. 2/2019, núm. 74/2019 y núm. 35/2020.

<sup>24</sup> Véanse las opiniones núm. 28/2017, núm. 42/2017, núm. 71/2017, núm. 20/2018, núm. 21/2018, núm. 50/2018, núm. 74/2018, núm. 1/2019, núm. 2/2019, núm. 74/2019 y núm. 35/2020.

<sup>25</sup> CCPR/C/AUS/CO/6, párrs. 33 a 38.

<sup>26</sup> E/C.12/AUS/CO/5, párrs. 17 y 18.

<sup>27</sup> CEDAW/C/AUS/CO/8, párr. 53.



Racial<sup>28</sup>, así como el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes<sup>29</sup> y el Grupo de Trabajo<sup>30</sup>, vienen recordando al Gobierno esas obligaciones de manera constante. El Grupo de Trabajo reitera una vez más la voz unánime de estos mecanismos internacionales independientes de derechos humanos y exhorta al Gobierno a que revise con carácter urgente y sin demora su legislación a la luz de las obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

119. El Grupo de Trabajo celebra la invitación que le cursó el Gobierno el 27 de marzo de 2019 para que realizase una visita a Australia en 2020. Si bien la visita tuvo que aplazarse debido a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), el Grupo de Trabajo espera con interés llevarla a cabo lo antes posible. El Grupo de Trabajo considera que dicha visita constituye una oportunidad de colaborar de manera constructiva con el Gobierno y ofrecerle asistencia para que atienda las graves preocupaciones expresadas respecto de casos de privación arbitraria de la libertad.

### **Decisión**

120. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad del Sr. Laltu es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 2, 3, 7, 8, 9 y 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, 9 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías II, IV y V.

121. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Australia que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Laltu sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

122. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner al Sr. Laltu inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional. En el contexto actual de la pandemia mundial de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y de la amenaza que supone en los lugares de detención, el Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno a que adopte medidas urgentes para liberar inmediatamente al Sr. Laltu.

123. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Laltu y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

124. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes para que tome las medidas correspondientes.

125. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

### **Procedimiento de seguimiento**

126. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Laltu y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Laltu;

<sup>28</sup> CERD/C/AUS/CO/18-20, párrs. 29 a 33.

<sup>29</sup> A/HRC/35/25/Add.3.

<sup>30</sup> Opiniones núm. 50/2018, párrs. 86 a 89, núm. 74/2018, párrs. 99 a 103, núm. 1/2019, párrs. 92 a 97, núm. 2/2019, párrs. 115 a 117, núm. 74/2019, párr. 80, y núm. 35/2020, párrs. 98 a 103.

c) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Laltu y, de ser así, el resultado de la investigación;

d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Australia con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;

e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

127. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo mediante una visita del Grupo de Trabajo.

128. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

129. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado<sup>31</sup>.

*[Aprobada el 24 de noviembre de 2020]*

---

<sup>31</sup> Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.